

Crónica del mes

Mayo-junio

Sin lugar a dudas, el cierre del primer año de gobierno de Elías Antonio Saca ha sido el acontecimiento de mayor trascendencia nacional durante los meses de mayo y junio de 2005. De acuerdo con la encuesta de la UCA realizada para evaluar los doce meses de gestión presidencial, casi la mitad de los salvadoreños piensan que el país está igual, no ha mejorado, pero tampoco ha empeorado en estos meses; asimismo, casi dos terceras partes de la población indicaron que el país necesita un cambio de marcha. Pero, en términos generales, la gestión de Saca goza de buena salud entre la opinión pública. También en materia política, los partidos políticos se hallaban moviendo sus piezas de cara a los comicios legislativos y municipales de 2006. Las luchas internas por la imposición de candidaturas desnudaron en todos los partidos, sin excepción, cualquier intento de aparecer ante la opinión pública con un cariz democrático inexistente, en lo que a la toma de decisiones internas se refiere.

Mayo también encontró al Ejecutivo cabildeando en Estados Unidos para garantizar en el Congreso norteamericano la aprobación del TLC entre ese país y Centroamérica (conocido como CAFTA). Se dieron algunos pasos al respecto, ante algunas victorias parciales de los defensores del tratado en el Congreso norteamericano, pero aún, al cierre de junio, quedaron pendientes las votaciones más cruciales en la Cámara de Representantes. Mientras tanto, ni las asambleas nacionales de Costa Rica, Nicaragua y Dominicana habían logrado ratificar el convenio comercial, por la incidencia de asuntos internos.

Finalmente, durante el mes de junio se destapó una crisis que se veía venir desde hace años en el sector transporte, cuando los empresarios de autobuses acordaron aumentar de nuevo las tarifas del servicio de transporte público en las zonas urbana

y rural, ante la incapacidad del gobierno central de poner freno a otro de los caprichos de quienes realmente parecen llevar las riendas en ese sector. Así pues, durante los meses de mayo y junio, la evaluación del primer año de Saca al frente del Ejecutivo, los movimientos electorales de los partidos políticos, los cabildeos gubernamentales en pro del CAFTA y una nueva crisis en el sistema de transporte público han sido los asuntos que más han llamado la atención de la opinión pública y de los analistas.

Mayo inició con la celebración del Día Internacional del Trabajo, en cuyo marco el ministro del ramo correspondiente, Roberto Espinal, opinó sobre el reto de la institución que comanda: "tiene tanto componente social el derecho laboral en sí que había que dar un salto de calidad para mejorar los estándares laborales del país". No obstante lo anterior, ni el Ministerio de Trabajo ha jugado un papel relevante en los primeros doce meses de gobierno de Elías Antonio Saca ni el tema laboral ha sido incluido en la agenda de prioridades nacionales.

Paralelamente, la prensa nacional hizo eco de algunas agresiones a periodistas, enmarcadas dentro de la marcha alusiva a la festividad del trabajo. "Estamos condenando el hecho. En nada abona a consolidar la democracia", comentó la presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Herminia Funes. La marcha reunió a miles de salvadoreños de los sectores laboral, sindical y otras organizaciones sociales, en una convocatoria pocas veces vista en San Salvador durante los últimos años. Mientras tanto, el líder efemelenista Schafik Handal, desde la Plaza de la Revolución, en La Habana, lanzaba una dura crítica al neoliberalismo y a la estancia del terrorista Luis Posada Carriles en El Salvador, de acuerdo a *Granma*, el diario oficial del partido comunista cubano.

En otro orden, a dos años de gestión municipal en el país, el matutino *La Prensa Gráfica* publicó los resultados, el día 2, de un interesante ejercicio de evaluación ciudadana sobre sus respectivos municipios. “Los principales problemas en los municipios del área metropolitana —delincuencia común, maras y falta de agua— no son de estricta competencia de las alcaldías. Los dos primeros están en manos de la Policía Nacional Civil y el tercero en las de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). El mal estado de las calles, otro problema acuciante en estos municipios, mantiene enfrentados a los gobiernos locales con el gobierno central. Hay debate sobre quién debe resolverlo. Los problemas restantes, calles sucias y mal servicio de recolección de basura, son de entera competencia edilicia”, se lee en la ficha periódica elaborada por el citado rotativo. Con todo, el pronunciado debate entre la gremial de las municipalidades (COMURES) y el Ejecutivo —que caracterizó a prácticamente toda la gestión del ex presidente Flores— ha dado pie, al menos, a un mínimo entendimiento.

Por otro lado, el mismo 2 de mayo, la PNC dio a conocer las estadísticas de homicidios reportados por ese cuerpo policial durante el mes de abril. Según la fuente, se contabilizó un total de 266 homicidios en todo el país, lo cual supone que, a diario, fueron asesinados, en promedio, 8.8 salvadoreños. En enero, la Policía había reportado 297 crímenes mientras, en febrero y marzo, las cantidades descendieron a 257 y 233, respectivamente. En total, el cuerpo policial dio cuenta de 1 053 homicidios, entre enero y abril de 2005. Al día siguiente, siempre en materia de seguridad pública, un periódico nacional reveló los detalles de una entrevista realizada al recién nombrado director norteamericano de la oficina del FBI en El Salvador, Robert Clifford, cuerpo que contribuirá a la lucha en contra de las pandillas que se realiza en El Salvador, Honduras y Guatemala. “El propósito es servir como un punto de coordinación del gobierno de Estados Unidos para todos nuestros esfuerzos contra la mara Salvatrucha”, dijo Clifford.

El día 5, el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA presentó los resultados de la investigación “La victimización y la percepción de seguridad en El Salvador en 2004”, los cuales apuntan a que los salvadoreños perciben como un problema “menor” la presencia de maras dentro de sus comunidades, pero, paradójicamente, a nivel

nacional, sí sienten que es un grave problema. La investigación fue encargada por el Ministerio de Gobernación y financiada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Días después, el 12 de mayo, la prensa nacional hizo eco de la aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de una ley conocida como Acta de Disuasión de Pandillas y Protección de la Comunidad, que vendría a agravar los cargos en contra de pandilleros infractores en ese país. De acuerdo a la normativa, los miembros de maras podrían enfrentar condenas a cadena perpetua y hasta pena de muerte, si estuvieran involucrados en el asesinato de personas. El ministro de Gobernación salvadoreño, René Figueroa, al ser consultado sobre su posición ante la medida norteamericana, comentó que “las nuevas disposiciones en Estados Unidos corroboran que hemos estado siempre en la vía correcta en las lucha contra las pandillas”. No obstante, el funcionario enfatizó el temor de las autoridades salvadoreñas: “lo que nosotros les hemos pedido, en repetidas ocasiones, es que no nos vayan a mandar a los pandilleros que capturen. Allá tienen varias cárceles, el recurso, para que los pandilleros cumplan sus penas”, acotó.

Simultáneamente, y en el marco de los preparativos a las próximas elecciones legislativas y municipales de 2006, la cúpula del FMLN anunciaba que la candidatura oficial de ese partido para disputarse la continuidad en la alcaldía de San Salvador recaería sobre la actual diputada Violeta Menjívar, desechando el respaldo oficial al todavía alcalde, Carlos Rivas Zamora. Este último había mostrado su descontento con la dirección del partido desde hace varios meses y se veía su marginación de las candidaturas para 2006. El 13, el actual alcalde de San Miguel, Will Salgado, desechado por su partido para competir por el control de la municipalidad el año próximo, anunció públicamente su cambio a las filas del PCN, para buscar su reelección. Salgado, al igual que Rivas Zamora y el santaneco Orlando Mena, han sido marginados por sus respectivos partidos para colocar nuevas figuras al frente de las respectivas comunas. Ese mismo día, el tribunal de ética del FMLN comunicaba al alcalde de Santa Ana, Orlando Mena, la suspensión del partido por dos años, inhabilitándolo para aspirar a la reelección, al menos por la bandera roja. La suspensión se habría debido a la decisión del alcalde de cesar a un grupo de trabajadores por “razones políticas”.

El 16, el alcalde efemelenista de Santa Tecla, Óscar Ortíz, criticó la decisión del tribunal de ética de su partido y se solidarizó con su colega santaneco: "es un golpe fuerte a la unidad del FMLN, estoy totalmente sorprendido. Esto es una provocación, una provocación innecesaria", dijo. "No puedo tolerar la corrupción, la impunidad dentro del FMLN", concluyó el crítico de la dirección efemelenista. Por su parte, el edil sancionado dijo que seguiría al frente de la comuna y buscaría su reelección, aunque fuera con otra bandera.

En lo que a la economía se refiere, el mes de mayo iniciaba con más promesas del presidente Elías Antonio Saca. Así, el 2, el mandatario lanzó oficialmente el programa "Tu Crédito", que pretende otorgar unos cien mil nuevos créditos a actividades productivas agropecuarias, industriales y de comercio en los próximos cuatro años. Días después, el 6, miembros del gabinete económico del gobierno presentaron un balance de la economía nacional durante los meses transcurridos en 2005. De acuerdo a las cifras manejadas por el Banco Central de Reserva (BCR), la tasa de inflación observada hasta abril de este año ascendía a 4.4 por ciento, comparada con el 3.9 por ciento registrado en todo 2004. Según la fuente, el 68.8 por ciento del alza inflacionaria se debe al incremento de los alimentos y el transporte, debido, a su vez, a las alzas en los precios del petróleo. Tal tendencia fue ratificada por la ministra de Economía, Yolanda Gavidia: "el aspecto negativo que más está influyendo en el costo de vida es el petróleo", acotó. Para el ministro de Agricultura, Mario Salaverría, el agro, en cambio, sí ha experimentado buenos resultados en la actual coyuntura, debido a la mejora en los precios del café, el repunte de la producción de caña, la reactivación del cultivo del algodón y el mantenimiento de la tasa de pesca.

Pero pese a los buenos augurios del gobierno en materia económica, la Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio de Economía (DIGESTYC) fijó la canasta de mercado de un hogar en 642.40 dólares mensuales, hasta abril del presente año, mientras, a la misma fecha de 2004, ascendió a 615.4 dólares, lo cual es un claro indicador de la disminución del poder adquisitivo de los salvadoreños. En esa misma línea, el día 10, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) presentó su informe trimestral de coyuntura económica, sosteniendo que los modestos resultados económicos han respondido a los

altos precios internacionales del petróleo, la competencia de China en el mercado textil y el alza en las tasas de interés a escala internacional. FUSADES también señaló que el atraso de 26 días en la aprobación del presupuesto general de este año repercutió en la disminución de la inversión nacional.

El 11, los presidentes de Centroamérica se hallaban cabildeando apoyo entre los congresistas norteamericanos para la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, la región y República Dominicana (CAFTA). La prensa hizo eco de las dudas entre la mayoría de congresistas que aún no habían decidido su apoyo al acuerdo comercial, sobre todo en el área laboral y la pérdida de posibles fuentes de empleo. Paralelamente, se daban protestas en Washington y en Tegucigalpa, en contra de la aprobación del CAFTA. En la primera de ellas participó el legislador salvadoreño Salvador Arias, acérrimo opositor del tratado. El ministro de Gobernación, René Figueroa, tildó a Arias de "agitador" y "traidor". El diputado sostuvo, no obstante, que se encontraba en misión oficial por la capital estadounidense.

Ese mismo día 11, el ministro de Hacienda, Guillermo López Suárez, reconoció que el gobierno central había incurrido en más gastos de lo autorizado para el primer trimestre del año, conforme a una investigación de la unidad de análisis y seguimiento del presupuesto de la Asamblea Legislativa, misma que determinó que el Ejecutivo gastó 56.6 millones de dólares arriba de lo autorizado. Empero, el ministro aclaró que "hay vigilancia absoluta en temas de viáticos, combustible y energía eléctrica, y se está trabajando en un ahorro más eficiente en todas las instituciones".

El día 12, los presidentes centroamericanos cerraron su gira por Washington, celebrando una cumbre junto al mandatario de Estados Unidos, George W. Bush. Este último dijo que él mismo impulsaría la ratificación del tratado entre los congresistas de su país: "me voy a unir en el esfuerzo de que esta ley pase porque es buena para los países centroamericanos y es buena para Estados Unidos", aseguró. En paralelo, la prensa nacional citaba un estudio del Banco Mundial (BM), organismo que, pese a apoyar desde el principio el CAFTA, señaló que hay algunas medidas que se deben tomar concomitantemente: "es improbable que el acuerdo por sí mismo produzca beneficios sustanciales de desarrollo sin esfuerzos paralelos", tales como educación, lucha contra la corrupción y transporte,

se leía en el documento preliminar recogido por algunos medios salvadoreños. Antes de regresar a sus países, los mandatarios del área participaron en un foro televisado por la cadena *CNN en español*, en donde dejaron sentadas sus posiciones sobre el CAFTA. El presidente nicaragüense, Enrique Bolaños, sostuvo dramáticamente que “si no se aprueba, seguiremos en la miseria que tenemos y que fue creada en los años ochenta”.

El 24, *La Prensa Gráfica* publicó una entrevista realizada al presidente Saca en la que éste afirma que la economía nacional podría experimentar un repunte al final del año: “si los precios del petróleo continúan cayendo como esta última semana, seguimos haciendo a tiempo la inversión pública, continúan las inversiones extranjeras y el detonante principal, el CAFTA, se ratifica, estaremos frente a un mejor panorama económico hacia finales de año”, aseguró el mandatario. Pero dos días después, el 26, el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Federico Colorado, dijo que la gremial empresarial estima que la economía del país crecerá al final del año en un mismo nivel que en 2004; es decir, no más del 1.5 por ciento del PIB, matizando el optimismo gubernamental, que fija el crecimiento en el 2.5 por ciento. Paralelamente, un rotativo de circulación nacional entrevistaba al economista Carlos Acevedo, del PNUD, para quien la economía nacional difícilmente llegaría a crecer más del 2 por ciento. “A mí me gustaría tener una visión más rosácea de la situación económica, pero no veo dónde están los datos que me permitan tener esa visión, y de optimismo uno no come”, dijo el economista.

El 28 de mayo, el Banco Central de Reserva informó que “el ingreso por remesas familiares enviadas por salvadoreños no residentes en el país totalizó 1 144.7 millones de dólares entre enero y mayo de 2005, registrando un crecimiento anual de 15.1 por ciento respecto al mismo período del año pasado”. Sólo en el mes de mayo, el ingreso “fue de 250.1 millones de dólares, cifra superior a los 220.5 millones de dólares registrados en mayo de 2004”, alcanzando el máximo histórico en concepto de remesas.

Días después, el 31, el presidente Saca juramentó al médico Ricardo Lara Herrera como director ejecutivo del Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD), acción que estaba pendiente desde que el mandatario prometió su creación al inicio de su gestión. “Los resultados que esperamos con

el FOSALUD son beneficiar a 4 millones de habitantes, generar empleo, satisfacción a los usuarios con atención de calidad, mejorar los accesos al sistema público de salud, favorecer el uso adecuado de los establecimientos y mejorar el nivel de salud de los salvadoreños”, dijo Saca. Al mismo tiempo y a las puertas de cerrar el primer año de gobierno, el ministro de Salud, Guillermo Maza, oficializaba la destitución de los directores de los hospitales nacionales Bloom y San Juan de Dios, Carlos Figueroa y Rafael Guerra, respectivamente. Estos habían tenido diferencias con el titular de Salud en temas clave como la prevención y emergencias por enfermedades.

Finalmente, vale traer a memoria la reacción general ante el fenómeno atmosférico que mantuvo en situación de emergencia al país durante unos días, por su inminente irrupción en territorio salvadoreño. En efecto, el 18 de mayo, el Comité de Emergencia Nacional (COEN) emitía alerta nacional por el ingreso desde el Pacífico de la tormenta tropical “Adrián”, a territorio salvadoreño. La misma institución había identificado ya unas 800 zonas de riesgo. Al mismo tiempo, la Asamblea Legislativa decretaba estado de emergencia y calamidad pública en forma preventiva por el paso del fenómeno atmosférico. Un día después, unas 15 mil personas habían sido evacuadas de zonas de alto riesgo debido a la llegada de “Adrián”. El sector público y privado había paralizado actividades y los salvadoreños abarrotaban, las tiendas y supermercados que abrieron sus puertas para el abastecimiento de alimentos y otros productos necesarios en caso de emergencia.

Pero horas después de tocar territorio salvadoreño, el fenómeno se degradó al punto de no constituir amenaza alguna. Las autoridades aseguraron que las formaciones montañosas y otros factores ambientales debilitaron al fenómeno. Lo cierto es que, hasta el 20 de mayo, “Adrián” no era más que chubascos aislados en algunas partes del país. Ese mismo día, la procuradora de Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, criticó el manejo gubernamental de la emergencia: “siento mucho que en una contingencia los peores opositores entre sí están de acuerdo para quedar bien en política. La oposición cayó en la trampa, fue un show”, subrayó la funcionaria. La tormenta, al menos, dio tregua a la violencia, pues sólo se reportó un homicidio en todo el país durante el día en que la tormenta tocó territorio nacional. El 21, el presidente Saca y su

ministro de Gobernación anunciaron que el Ejecutivo trabajaría en la creación de un fondo destinado a enfrentar los desastres naturales, a la vez que retomarían el estudio de una ley de desastres.

La algarabía suscitada por "Adrián" fue tal que se puso de moda hablar de la evaluación ciudadana sobre cómo se enfrentaron las autoridades gubernamentales ante la tormenta tropical. El huracán que no fue y los destrozos anunciados que nunca llegaron, constituyeron un buen motivo, según algunos, para destacar que el gobierno de Antonio Saca se hizo acreedor de una nota sobresaliente. Así, no faltó quien quiso dar "gracias a Adrián" (algunos también dijeron que Dios había salvado el país) porque, según un articulista que escribió el día 21 en *La Prensa Gráfica*, "nos ha permitido darnos cuenta de que, cuando queremos, podemos ser un pueblo unido, sólido y con un alto espíritu de hermandad".

El gobierno de Saca, naturalmente, se llevó las palmas por esta supuesta unidad forjada en tiempos difíciles. Se aplaudió el hecho de que el gobernante invitó a todos los responsables de organizaciones políticas del país a que se le unieran en la lucha en contra del fenómeno climático. Algunos llegaron a sugerir que el nivel de cohesión mostrado es una buena señal para el futuro político del país. Consecuentemente, se empezaron a esgrimir pseudo sondeos de opinión sobre la evaluación de los salvadoreños de la labor de prevención del gobierno. El titular del periódico antes aludido resulta elocuente: "Sondeo da voto de confianza a quienes manejaron la emergencia". No importa que este supuesto sondeo no tuviera validez científica alguna. En todo caso, después del paso de la tormenta tropical, Saca salió fortalecido.

Al mismo tiempo, también se fustigó a la oposición, sobre todo a quienes se atrevieron a decir que el gobierno exageró deliberadamente la amenaza del huracán, para recolectar mejores frutos políticos. *El Diario de Hoy* catalogó a quienes piensan de esta manera de farsantes e irredentos rojos. "Tan pronto se anunció que la emergencia había cesado, la radio comunista y una estación de TV, además de la pobre alcohólica, comenzaron a denunciar la farsa del huracán Adrián. Echando mano de las artes en que son maestros consumados —mentir, difamar y calumniar— los comunistas están esforzándose para destruir lo actuado por el gobierno para proteger a la población del huracán". Lo peor para el editorialista fue que "la perfidi-

dia de la campaña roja para desacreditar la labor de prevención, es que de estar bajo una similar amenaza en el futuro, habrá quienes no atiendan los llamados, quedando en grave peligro".

El virulento ataque del editorialista de *El Diario de Hoy*, además de ser rayano en la vulgaridad, fue una muestra clara de las intenciones de los defensores del gobierno. No sólo se trató de destacar la buena actuación de Saca, sino también poner de relieve que tampoco se debe mostrar disposición a compartir crédito alguno con los demás políticos que estuvieron presentes durante la emergencia. Cabe recordar que ningún miembro del FMLN cuestionó públicamente los esfuerzos de prevención del gobierno. Tampoco nadie se atrevió a hablar del manejo de la información, que puede calificarse cuando menos de tendencioso y alarmista, por parte de los periodistas comprometidos con la causa oficial.

El actual gobierno, a diferencia de sus antecesores, hizo un esfuerzo para prevenir y minimizar el impacto que pudiera causar la entrada de la tormenta tropical en territorio salvadoreño. En este sentido, si se compara la actuación de Saca respecto de sus predecesores areneros, hay que destacar su capacidad de movilizar a toda la sociedad para prevenir cualquier desgracia. El país está tan acostumbrado a la irresponsabilidad del partido oficial, que se tiene que desplegar tanta parafernalia por el único hecho de que el gobierno actuó con cierta sensatez.

Tampoco la situación dio para tanto. Como se trató de un huracán que no fue, difícilmente se podrá medir si realmente las medidas tomadas eran suficientes para evitar peores desgracias. Un análisis desapasionado de la realidad no da más que para subrayar que el gobierno se movilizó en función de la emergencia, pero que hace falta un marco jurídico para estos y otros casos que seguirán presentándose en el país. Además, son relevantes las declaraciones de los propios miembros del gobierno, que consideraron que el COEN tiene que afinar un poco más sus mecanismos y estrategias para recabar información.

En este sentido, las discusiones que se abrieron en la Asamblea Legislativa para crear una ley de desastres siguen el camino correcto. De nueva cuenta, en este tema, tampoco el gobierno está siendo pionero. Hace mucho que algunas organizaciones de la sociedad civil presentaron una iniciativa para que se aprobara una ley de desastres. Pero, como es costumbre en la política criolla, los

políticos nunca tuvieron el tiempo para dedicarle a algo que no iba a generar apoyo inmediato por parte de la población. En todo caso, hoy es más rentable para los sectores oficiales hablar de una ley de desastres, no sólo porque el gobierno desea seguir dando la imagen de responsabilidad y preocupación por el bienestar de los salvadoreños, sino también porque se presentan unas elecciones cruciales el próximo año. Mayo acababa, pues, con esa vorágine de congratulaciones ciudadanas que auguraba buenos resultados para las evaluaciones que siguieron al primer año de gestión de Antonio Saca.

Ya el IUDOP se había adelantado a las evaluaciones y el 25 de mayo presentaba los resultados del examen ciudadano al primer año de gestión presidencial. De acuerdo al sondeo, "los salvadoreños calificaron con una nota promedio de 6.56, sobre una escala de 0 a 10, al gobierno de Antonio Saca por su desempeño en el primer año de gestión". La fuente destacó que Saca "ha obtenido la mejor nota en las evaluaciones ciudadanas que se han hecho al cumplir el primer aniversario de los gobiernos presidenciales de ARENA. En 1995, Armando Calderón Sol obtuvo una nota promedio de 4.96; en 2000, Francisco Flores fue evaluado con un 5.41". Además, según el IUDOP, "prácticamente la mitad de los salvadoreños (51.3 por ciento) ha visto un cambio positivo en el país desde que asumió el poder la administración de Antonio Saca hace un año, frente a la otra mitad de ciudadanos (48.7 por ciento) que no ha visto cambios positivos en el país con el cuarto gobierno de ARENA". La percepción se reparte, pues, equitativamente entre los defensores y los opositores a la cuarta gestión presidencial de ARENA.

Una parte de la población ve como logros el combate de la delincuencia, la aplicación del Plan Súper Mano Dura, la construcción de carreteras y la infraestructura vial del país. Por el contrario, muchos consideran que el incremento en el costo de la vida, la falta de empleo, el alza en los servicios básicos, el incremento en el número de homicidios y la delincuencia han sido los fracasos de la actual gestión. El sondeo concluye que "un examen más detenido de los tipos de fracasos identificados por la población revela que la mayor parte de éstos son de índole económica. Entre el alza en los costos de la vida y los precios, el desempleo, la pobreza, la dolarización y el TLC, se concentra un poco más de la tercera parte de la población".

En esa línea, el 1° de junio, el mandatario acudió a la Asamblea Legislativa para rendir su informe a la nación, en el marco del cual enumeró una larga lista de logros que se agencia durante su mandato. Saca comprometió, además, cuatro medidas que impulsaría durante su segundo año: política nacional de vivienda, política para el sector industrial, un plan de reducción de las comisiones que pagan los trabajadores a las AFP y aumento salarial para los empleados públicos. Las reacciones de la clase política no se hicieron esperar. Para el legislador del FMLN, Schafik Handal, "el presidente se siente satisfecho, el pueblo no. La situación no ha cambiado, ha empeorado". Del mismo tenor fue la opinión del diputado de CD, Héctor Dada Hirezi: "el vacío más grande fue que no hizo un balance de los verdaderos problemas nacionales", criticó.

Interesante fue la postura del abogado Henry Campos, quien en su columna de opinión criticó, días después, la utilización impertinente del recurso de cadena nacional por parte del presidente en ocasión de su discurso: "en nuestro país, ciertos sectores que usan la toma violenta de calles, como forma de hacerse escuchar; y por otra parte el gobierno, que impone una larga cadena nacional, se parecen. Obviamente que el control que hace el gobierno es más absoluto en comparación al que hacen aquellos, pues se trata del cierre total de las vías de comunicación televisiva y radial impidiendo la circulación de otras ideas o programas para marchar con un solo discurso". Simultáneamente, varias organizaciones sociales se manifestaban por las calles de San Salvador protestando en ocasión del primer año de gobierno.

Como quiera que sea, el presidente Saca cumplió su primer año al frente del Ejecutivo. Aunque un año es insuficiente para dar cuenta de resultados sustantivos en los grandes temas que preocupan a la sociedad salvadoreña, no lo es cuanto a la definición de las líneas maestras de conducción gubernamental en lo que resta de mandato presidencial. Desde este punto de vista, el año transcurrido es más que suficiente para enjuiciar no sólo el estilo de gobierno de Saca, sino cuáles son los límites estructurales de su gestión.

A propósito del estilo de gobierno del presidente Saca, se tiene que decir, ante todo, que su primer año al frente del Ejecutivo ha sido fuertemente mediático. El presidente ha sido, en este sen-

tido, una imagen publicitaria: muchas apariciones en los medios, muchas entrevistas, muchas fotografías, muchas sonrisas... Prácticamente, todo fue arreglado —o aprovechado— para que Saca luciera su mejor ángulo ante las cámaras. Los grandes medios —ciertamente, unos más que otros— se prestaron a este juego de imágenes y de *marketing*; el presidente, por supuesto, estuvo en lo suyo, haciendo lo que mejor sabe hacer: posar para las cámaras, sonreír amigablemente y decir lo que todos querían escuchar. A juzgar por las simpatías que despierta entre amplios sectores de la población, su desempeño en los medios ha sido más que exitoso.

Ahora bien, no todo ha sido simpatía, sonrisas y amabilidad por parte del presidente Saca en este primer año de gobierno. Su faceta populista se ha visto acompañada de una cara autoritaria que a veces ha recordado los peores y más característicos momentos del ex presidente Francisco Flores. Es decir, en el estilo de gobierno de Saca se ha dibujado una peligrosa combinación de populismo y autoritarismo que, de persistir y afianzarse en los siguientes cuatro años, se convertiría en un obstáculo más para el avance de la democracia en El Salvador.

Y es que el presidente Saca es populista, no sólo cuando se muestra como un amigo de todos, sonriente, simpático y amable, sino cuando abandera un proyecto de combate a la pobreza a partir de una ayuda económica otorgada por el Estado a familias en condiciones de precariedad extrema. Sobra decir que ni la amabilidad es mala ni tampoco lo es ofrecer ayuda directa e inmediata a quienes más lo necesitan. No obstante, ni ser simpático hace de un presidente un mejor gobernante, ni dar ayuda económica a los más pobres resuelve en el largo plazo el problema de la pobreza.

Como quiera que sea, el populismo es un modo de ejercer el poder, que consiste en crear vínculos y lealtades políticas por la vía del otorgamiento de ayudas, subsidios o prebendas a determinados sectores de la sociedad. El presidente Saca goza de un encanto populista que, sin dar pie a fuertes movilizaciones de masas —como fue el caso de los populismos tradicionales— ha seducido a una parte significativa de los salvadoreños que ha depositado sus esperanzas en él.

Sin embargo, el populismo —es decir, el lado amable del presidente— no lo es todo, pues el mismo se ha visto acompañado de un claro com-

ponente autoritario, tal como ha sido lo usual en otros casos de populismo. Para empezar, hay que hacer notar la excesiva centralidad de la figura del presidente: como en la época de Flores, todo parece girar en torno a las decisiones y la persona de Saca, como si él fuera el amo y señor de los destinos del país. Esta forma de ver las cosas, asimismo, se ha traducido en decisiones inconsultas por parte del gobierno —como la reforma fiscal, la promoción de Francisco Flores como candidato a la secretaria general de la OEA o la autorización para la permanencia de tropas salvadoreñas en Irak—, cuyas consecuencias son de amplio alcance social y político.

Es difícil ser populista sin ser prepotente y sin ocupar un papel protagónico en el escenario político. El presidente venezolano Hugo Chávez es quizás, en la actualidad, el ejemplo extremo de ello. Francisco Flores —más cerca de nosotros— fue prepotente y nada populista, esto último, porque no era simpático, ni tampoco se le cruzó por la cabeza que a los pobres del país había que ofrecerles comida en lugar de sabiduría oriental mal digerida. Antonio Saca, salvando las distancias, está más cerca de Chávez que de su predecesor Flores: la prepotencia de este último es un mal recuerdo, cada vez más opacado por la simpatía mediática de Saca, así como por su proclamado compromiso con los más pobres de los salvadoreños.

Hasta aquí, Saca ha salido bien librado y si su primer año de gestión se juzgara por cómo ha combinado populismo y autoritarismo —logrando que éste apenas se note— no habría más que pedirle. El asunto es que a Saca hay que pedirle más que eso y, en ese sentido, hay que juzgarlo por otras cosas. Por ejemplo, hay que juzgarlo por el cumplimiento (o incumplimiento) de su compromiso de hacer de lo social la prioridad más importante de su gestión. Y, desde esta perspectiva, la situación no pinta muy bien para Saca. Porque, hasta ahora, ese compromiso no se ha visto apuntalado por políticas públicas de peso, es decir, por políticas estatales que vayan encaminadas a hacer de lo social el centro de las preocupaciones del gobierno.

Por más publicidad que se haya dado al plan social y a las ayudas que emanarían del gobierno hacia determinados sectores sociales, lo económico fue, en este primer año, la prioridad de Saca. Más concretamente, lo prioritario siguieron siendo los intereses de un segmento del gran empresariado transnacionalizado que vio crecer, a la sombra del

amparo gubernamental, sus negocios, inversiones y fusiones bancarias. El gobierno de Saca ha dado señales inequívocas de querer sacar algo de este sector para trasladarlo a la sociedad; pero ese algo se quiere obtener como dádiva, con una reforma tributaria tibia que sólo roza esos intereses y que descansa sobre unos sectores medios frustrados y endeudados. Lo social nunca va a ser prioridad, mientras el gobierno de Saca se conforme con el concepto de "responsabilidad social empresarial". A lo sumo, lo social será complemento obligado —siempre propenso a convertirse en algo prescindible— de una lógica económica que los gobiernos de ARENA —incluido el de Saca— consideran inamovible.

Por otra parte, en lo que a la actividad parlamentaria se refiere, se continuó viviendo un clima de escaso entendimiento entre las dos fuerzas mayoritarias y las fracciones pequeñas. Una de las mociones legislativas más controversiales fue la reelección de la cúpula que dirige la Corte de Cuentas de la República, que desde hace ya dos décadas se ha convertido en coto exclusivo del PCN. Así, el día 2 de junio, diputados de ARENA, PCN y PDC reeligieron por tres años más al presidente de la Corte, Hernán Contreras, al primer y al segundo magistrado, Abdón Martínez y Martín Marín, en su orden. Martínez es afín a ARENA y Marín al PDC, por lo que las tres fracciones garantizaron sus intereses al frente del ente contralor del Estado.

Los 29 legisladores del FMLN objetaron la elección por violar los procedimientos internos de la Asamblea, mientras los diputados del CD se retiraron en protesta por la moción de las fracciones de derecha. El resto de mociones legislativas se movieron según las coordenadas de este escaso entendimiento entre las fuerzas políticas allí representadas; sin embargo, nada fuera de lo normal hasta la segunda semana del mes, cuando la bancada del FMLN se volvió a estremecer por una nueva desbandada de al menos dos de sus diputados y otros funcionarios y dirigentes.

En efecto, el día 8, dos legisladores propietarios, dos alcaldes, un ex magistrado ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y unos 360 militantes llegaron a la sede del partido para interponer su renuncia del mismo. Con la medida, la fracción legislativa del FMLN se quedaría sin la llave para frenar las iniciativas del Ejecutivo que necesitan mayoría calificada —es decir 56 votos— dentro de la Asamblea Legislativa. La prensa destacó que los

últimos diputados disidentes, Ileana Rogel y Jorge Escobar, serían una excepción en la larga lista de defecciones del partido de izquierda debido a que todos los anteriores habían salido expulsados del partido o habían renunciado al apoyar mociones legislativas contrarias a la jefatura de la fracción. "Hemos sido tratados como ciudadanos de tercera clase dentro del FMLN, por eso nos vamos del partido", aseguró el ex magistrado de ese partido ante el TSE, Julio Hernández. También se hizo eco de los sentimientos encontrados entre los 27 diputados efemelenistas. El alcalde de Santa Tecla, Óscar Ortíz, responsabilizó a la dirigencia del partido: "a pesar de que nos duele esta situación, debe servir para que reflexione la actual dirección política, porque queremos una izquierda que sea alternancia en el poder", dijo. Pero la última renuncia no puede desmarcarse de clima preelectoral que vive el país.

El 9, el vicepresidente de Ideología de ARENA y ministro de Gobernación, René Figueroa, anunció que la candidatura de su partido para disputarse la comuna de San Salvador en los próximos comicios recaía en Rodrigo Samayoa. "Estoy listo para asumir la responsabilidad que me asigne el partido y listo para recuperar la alcaldía de San Salvador", dijo Samayoa al ser abordado por la prensa. El candidato arenero también aclaró su postura sobre la utilización del relleno sanitario de Nejapa, ampliamente cuestionado por la derecha: "Nejapa es el único relleno sanitario que cumple con los mejores estándares en todo el país y, por su puesto, San Salvador tiene que depositar en ese lugar la basura", enfatizó el candidato tricolor.

El 14, según notas de prensa, los dos diputados que días antes habían renunciado al FMLN se unieron con otros dos ex efemelenistas para dar vida al desaparecido Frente Democrático Revolucionario (FDR), instituto que fuera brazo político de la ex guerrilla del FMLN. Los miembros dejaron las puertas abiertas a otros expulsados del partido de izquierda y declinaron de participar en las próximas elecciones, aunque aseguraron que habían iniciado los trámites para inscribirse legalmente ante el Tribunal Supremo Electoral. De hecho, la prensa reveló que el día 15, el FDR había iniciado sus trámites legales de inscripción.

En otro orden, el día 10, el rotativo *La Prensa Gráfica* reveló que la empresa del ministro de Turismo, Luis Cardenal, había ganado una licitación por 24 mil dólares, transgrediendo la Ley de Ad-

quisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. "La empresa Aserradero El Triunfo, propiedad del ministro de Turismo, Luis Gonzaga Cardenal Debayle, ganó una licitación pública por 24 mil 440 dólares para la venta de madera destinada a la construcción de 330 viviendas. Según la ley de licitaciones, los miembros del consejo de ministros no pueden ofertar en concursos de este tipo", reza la nota periodística del citado diario.

El mismo medio publicó las reacciones de Cardenal, quien salió en la defensa de sus intereses empresariales: "no tengo nada que ocultar ni he hecho nada malo porque tengo una trayectoria en la cual me respaldo... Una cosa es mi empresa, una persona jurídica y otra soy yo", dijo. El funcionario, al ser cuestionado sobre la posibilidad de renunciar a su cargo, respondió lo siguiente: "siempre está a disposición. Si le estoy causando un daño al gobierno o al presidente, renuncio". De hecho, horas después, el presidente Saca anunciaba que había aceptado la carta de renuncia que le presentó Cardenal.

El 11, a raíz de la renuncia del ministro de Turismo, el presidente Saca anunció que introduciría precisiones a la Ley de Adquisiciones, a fin de superar las posibles ambigüedades. Mientras tanto, miembros del gabinete aplaudieron la decisión del ex ministro. Finalmente, el 15, el presidente Saca juramentó al nuevo titular de Turismo, José Rubén Rochi, quien pasaría a relevar a Cardenal en sus funciones. Mientras unos aplaudieron el gesto y destacaron la firmeza del presidente en contra de cualquier acto de malversación de fondos públicos, otros creen que debió anteponer la calidad del ministro antes de castigar este pecado venial.

Para un columnista del mismo medio que divulgó la falta de Cardenal, el presidente Saca no debió ceder tan fácilmente ante las presiones de la prensa. Por eso, considera que "el error de Cardenal debió corregirse amonestándolo y declarando nula la licitación". De paso, el comentarista amonesta al periódico que destapó el caso. "Sinceramente, en este caso no me parece especialmente meritoria la actuación de la prensa. [...] La noticia no ameritaba ser destacada de la manera en que lo fue, ya que no había suficientes indicios para tratar el incidente como un hecho grave de corrupción que debía resolverse con la renuncia o la destitución del funcionario".

Quizá, el presidente Saca decidió aceptar la renuncia de su ministro de Turismo para ser con-

gruente con la responsabilidad del Estado salvadoreño en la lucha en contra de la corrupción. Resulta que para el comentarista de marras en algunos casos hay que cerrar los ojos sobre la corrupción. Se puede violar la ley y quedar impune porque el personaje que lo ha hecho tiene un buen currículum o, simplemente porque no ha ganado mucho en la transacción. Sin embargo, en contra de esta interpretación sesgada sobre la manera de evaluar la corrupción de los funcionarios, según la sección VI.1.c de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC), se puede considerar como acto de corrupción "la realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero". En este caso, el ministro en cuestión obtuvo beneficios propios violando descaradamente las leyes de la República.

Por otro lado, es una lástima que Joaquín Samayoa, el autor del artículo mencionado, no haya profundizado más en su consideración según la cual el presidente "se anotó un triunfo fácil, a costa del sacrificio de uno de sus mejores colaboradores". Una profundización en esta línea quizá habría llevado al analista a subrayar la hipocresía con que Saca trata el tema de la corrupción. Mientras el presidente aceptó inmediatamente la dimisión de su ministro por comportarse de manera indebida —dicho sea de paso, ha sido una decisión atinada—, por otro lado, recién aprobó, en contubernio con el PCN —o, al menos, no alegó nada—, que este partido siga gobernando la Corte de Cuentas de la República. Cuando se sabe que este mismo presidente acababa de bendecir al partido que ha hecho de la Corte de Cuentas su coto privado, suena como una bofetada la rápida defecación de Cardenal.

Pero, así ha sido la política de Saca. Hueca en su contenido, pero llena de acciones espectaculares. Por eso, es comprensible que el ex ministro de Turismo y sus amigos manifiesten públicamente su decepción. Cardenal tiene derecho a sentirse decepcionado porque, con la aceptación de su renuncia, Saca le está echando en cara que es más corrupto y perjudicial para el país que la estructura de poder nauseabunda que quiere mantener, junto con el partido de las manitas, en la institución contralora de los gastos de la administración pública.

En lo referente a la economía, se ha dicho líneas arriba, ha sido el cabildeo gubernamental por

el CAFTA, por un lado, y la situación económica no tan bonancible en el plano doméstico, por otro, los asuntos que más han acaparado la atención de la prensa y los analistas económicos. Salvo algunas buenas noticias respecto de un incipiente repunte del agro —que no ha terminado de quedar claro que sea sostenible en el largo plazo— y del siempre creciente flujo de remesas familiares, no ha habido notas que sugieran optimismo, al menos entre la población. En ese marco, el día 10 de junio concluyó la zafra 2004-2005 con un récord de 12 millones 160 mil 657 quintales de azúcar, es decir un incremento del 5.71 por ciento respecto de la zafra anterior, cuando se produjeron poco más de 11 millones de quintales. El café, como se verá más adelante, también experimentaría un aumento de las exportaciones de café y de su precio internacional.

En lo que al camino de la aprobación del CAFTA se refiere, el 15, dos votaciones preliminares realizadas en el Congreso norteamericano sobre el borrador de la ley del tratado dieron un respaldo al acuerdo comercial, acrecentando el optimismo de los defensores del tratado tanto en Centroamérica como en Estados Unidos. Finalmente, de acuerdo a un comunicado de prensa del Banco Central de Reserva, hecho público el 27 de junio, “El Salvador exportó 1,433.8 millones de dólares entre enero y mayo del presente año, registrando una tasa de crecimiento de 7.1 por ciento anual, con relación al mismo período de 2004”. El precio efectivo del café llegó a 105.50 dólares por quintal en mayo de 2005, “siendo éste el mejor precio alcanzado desde abril de 2000”. No obstante, “las importaciones de enero a mayo de 2005 fueron de 2,688.7 millones de dólares, con un crecimiento de 8.6 por ciento anual con relación a las del mismo período del año anterior”. Una simple mirada a los anteriores datos muestra que la balanza comercial de El Salvador sigue siendo muy desfavorable, lo cual no se lee en los optimistas comunicados gubernamentales.

Pues bien, para finalizar el recuento de los acontecimientos más relevantes de mayo y junio, es de justicia recorrer, aunque sea someramente, el camino de estos doce meses de gestión presidencial, al menos en materia económica y social, pues de lo político ya se ha dicho bastante. En este sentido apuntado hay que decir que, al iniciar su mandato, Saca enfrentó una crítica situación económica heredada de la gestión de Francisco Flores. En ese momento, el país se encontraba con un bajo

nivel de inversión privada, un lento crecimiento económico, una alta deuda del gobierno central, un alto déficit comercial y el inicio del incremento en los precios del petróleo.

Todos estos elementos configuraban el escenario del país en el que, día a día, los salvadoreños perdían la capacidad adquisitiva de sus salarios. Después de la entrada en funciones del nuevo mandatario, se implementó una serie de medidas económicas que tenían la finalidad de reactivar la economía, hacer frente a las deudas del Estado y paliar la deteriorada situación económica de los salvadoreños. Las medidas económicas más importantes impulsadas por el actual mandatario son la reforma tributaria, el plan antipobreza y la apuesta por el CAFTA.

En lo tocante a la reforma tributaria, hay que decir que Saca heredó del gobierno pasado el incremento en la brecha entre los gastos y los ingresos del Estado. En tan sólo cinco años de gestión, el ex presidente Flores condujo al país a una situación de déficit fiscal sobre la cual alertaron diferentes calificadoras de riesgo internacional. En un modelo económico basado en las inversiones, la presencia concomitante de déficit fiscal desmotivó a la inversión privada. Para tratar de cerrar esa brecha, Saca anunció una reforma tributaria para lograr una mayor recaudación de impuestos. Para el mandatario, la medida no contemplaba el incremento de las tasas impositivas, más bien, estaba enfocada a combatir a toda costa la evasión fiscal.

Después de que iniciara su ejecución, se debe comprender que la reforma tributaria no es más que un paliativo de corto plazo. Para hacer frente al incremento de los gastos del Estado y el elevado nivel de la deuda internacional es necesario tener una tributación mucho más alta que la planeada con una reforma fiscal que únicamente busca expandir la base tributaria. Además, la ampliación de ésta lo que hace es reforzar la naturaleza regresiva de la política fiscal en el país.

Esto significa que la actual reforma refuerza la tendencia ya existente, según la cual los agentes económicos con un nivel inferior de renta son los que aportaban más al fisco. Siempre habrá algunas empresas que tendrán que tributar más, pero en términos relativos la mayor cantidad de ingresos del Estado provendrá de las personas con menos nivel de ingreso. Por lo tanto, es posible que con una estructura tributaria como la actual se refuerce

la desigualdad y, con ello, un deterioro en las condiciones económicas de muchos salvadoreños.

En lo que al plan antipobreza concierne, Saca anunció la creación de un programa destinado a atacar la situación de extrema pobreza en el país. Este programa estaría constituido por cinco componentes: FOSALUD, "Conéctate", un programa destinado a los jóvenes, Red Solidaria y microcréditos.

Con el FOSALUD se buscaba dar servicios médicos a cuatro millones de personas, durante los próximos años. Para el primer año, dicho plan contaría con veinte millones de dólares. Pero hasta la fecha este plan aún no se ha implementado y ello se debe principalmente a que no se han obtenido los fondos suficientes para su financiación. Otro de los programas más sonados a través de los medios de comunicación, pero que tampoco ha rendido resultados, es Red Solidaria. Este programa consiste en entregar subvenciones a los habitantes de los cien municipios más pobres del país. Con el mismo, se pretende entregar 50 millones de dólares anuales a las familias en situación de extrema pobreza. No obstante, a la fecha el programa aún no se ha ejecutado.

Otro de los componentes del plan antipobreza es la implementación de microcréditos dirigidos a la creación y el desarrollo de microempresas en el país. Con esta medida se busca que muchos salvadoreños puedan constituir su propia microempresa y hacer de ella una fuente duradera de ingresos. Se tiene previsto entregar 50 millones de dólares anuales, repartiéndolos a través de montos de 100 y 300 dólares. Al igual que Red Solidaria, este programa aún no se ha concretizado y es una muestra de que el gobierno aún no obtiene en materia económica resultados claros en beneficios de los salvadoreños.

Como se puede notar, medidas como Red Solidaria y el programa de micro-créditos —formas muy particulares de inversión pública— aún no se han concretizado. De acuerdo al diseño de estos planes, sus frutos deberán manifestarse con mayor claridad a partir del segundo año de gestión del presidente. Sin embargo, planes como el FOSALUD ya deberían estar dando los resultados prometidos.

Finalmente, uno de los principales objetivos que el Ejecutivo se plantea en el corto plazo es la existencia de un convenio comercial con Estados Unidos. Por ello, el presidente no ha escatimado esfuerzos en viajar para tratar de incidir en la decisión del Congreso norteamericano en favor del tra-

tado. El presidente presenta el CAFTA como una gran oportunidad de dinamizar el alza en los niveles de empleo, mayor inversión y, como consecuencia, mayor crecimiento económico.

Está claro que aún el mandatario percibe el TLC como una herramienta importante para el desempeño económico del país. No debería olvidarse, empero, que el CAFTA podría convertirse en un duro revés, dado el contraste entre los esfuerzos enfocados en el tratado y los pocos resultados obtenidos. Todo parece apuntar que debido a las altas expectativas que se tienen sobre el tratado, el gobierno salvadoreño todavía no realiza una política económica autónoma y sistemática que busque dar un nuevo vuelo a la economía. Deberían realizarse más esfuerzos para realizar una política sistemática de reconversión productiva que en esperar la ratificación del CAFTA. En definitiva, en este rubro de política comercial, al igual que el plan antipobreza, aún no se tienen resultados concretos.

Por otro lado, Antonio Saca ha utilizado la vuelta a lo social como su principal carta de presentación durante este primer año de gobierno. "Lo social no es complemento de nada. Lo social es la base de todo", reza uno de los estribillos más sonados en las comunicaciones de Casa Presidencial y repetido gustosamente por los medios. Pero, más allá de los dominios del *marketing* político y de la parafernalia de los discursos oficiales, que tantos réditos electorales ha dado al partido en el gobierno, ¿puede Saca basar su gobierno en lo social mientras su partido se ha suscrito desde hace 15 años a los dictados más radicales del neoliberalismo? En otros términos, ¿no estará el presidente Saca en franca contradicción con los principios más propios del partido que lo llevó al poder y con las figuras más emblemáticas de éste?

Desde que ARENA se encumbró en el Poder Ejecutivo, la dinámica de la sociedad salvadoreña ha girado en torno a lo económico. Primero fue el ajuste estructural y la apertura a los mercados. Ahora es el libre comercio. Los sucesivos gobiernos areneros se suscribieron a la oleada neoliberal más rapaz que conociera el subcontinente. A diferencia de otros países, en El Salvador se debilitó excesivamente el Estado y las reglas de la economía —y, a la postre, de todo la sociedad— se sometieron al criterio de los grandes empresarios y las transnacionales. La inversión social pública fue descuidada, pese a que el conflicto armado desnu-

dó aún más la precariedad de miles de salvadoreños.

Los señores de la economía consolidaron su incursión en la política. No es casual que la cúpula arenera haya estado dominada por eminentes empresarios, que incluso llegaron a poner las reglas en ARENA, a despecho de los dirigentes más políticos. El mismo presidente Antonio Saca es prueba de ello. La presidencia de la gremial empresarial más pudiente del país, la ANEP, fue la catapultadora hacia la presidencia de la República. Su éxito político es equiparado con su éxito empresarial. Es más, una de las ofertas más llamativas de su campaña electoral apuntaba a la consecución del éxito económico producto de una disciplina y perseverancia empresarial ejemplares: votar por Saca era, según el mensaje implícito en la campaña, emular dicho éxito.

La tendencia economicista arenera encontró su máxima expresión en el marco de la presidencia de Francisco Flores, quien se rodeó de hombres forjados a la usanza más radical del neoliberalismo. El énfasis en lo macroeconómico llevó al predecesor de Saca a implementar medidas impopulares — como la dolarización de la economía— y a descuidar, aún más, lo social. La población resintió inmediatamente el talante autoritario e insensible de Flores, al punto de castigar a su partido en los comicios legislativos y municipales de 2003, dando un gran apogeo político al FMLN.

En suma, en El Salvador se ha reproducido, de manos de ARENA, un fenómeno de alcance mundial que apunta a la agudización del énfasis de lo económico en el conjunto de la actividad social. Ciertamente, no se trata de un fenómeno coyuntural ni pasajero, sino de un largo proceso que se remonta a los orígenes mismos del capitalismo. Lo económico se apodera del tejido social y somete a las otras dimensiones: lo político, lo cultural y lo social mismo.

Antonio Saca debería ser franco con los salvadoreños y consigo mismo. Lo social no puede ser la base de todo. Ni siquiera un gobierno de izquierda —por definición más identificado con el énfasis en lo social— puede obviar los componentes económicos y financieros básicos, tal y como se han estructurado las sociedades modernas. No se trata, obviamente, de simples aclaraciones semánticas, sino de la conformación de la estructura social en el marco de una globalización acele-

rada, que empuja a los estados nacionales hacia mayores esfuerzos de inversión social pública.

Para cerrar, debe hacerse mención a la nueva crisis suscitada en el sistema de transporte público, desde que el día 10 de junio, las gremiales de empresarios de buses llamaron al gobierno a tomar acciones urgentes encaminadas a paliar la situación que padecían debido a la prolongada alza en los precios de los combustibles. La gremial pidió que fueran excluidos del pago del IVA y FOVIAL que gravan los combustibles, paralelo a la fijación de un precio preferencial en la compra del diesel. El 17, la Coordinadora Nacional de Transporte (CNT) se reunió para definir el tema del alza al pasaje del transporte público. Al final del encuentro, los representantes de los empresarios de buses decidieron aumentar la tarifa de 0.20 a 0.30 centavos de dólar, un 20 por ciento en el servicio de oriente y 30 por ciento en el resto del país. La parte gubernamental dijo que no había autorizado ningún incremento y que se aplicarían multas de ser necesario.

Pero el alza en las tarifas de transporte y en los precios de los alimentos también se complementa con el incremento en el precio de la energía eléctrica. Durante la segunda semana de junio, el costo de esta última se incrementó en 5.5 por ciento. Según algunos funcionarios del gobierno, esto se debió fundamentalmente al alza en los precios del petróleo. Dicho incremento representa un gasto adicional de 1.6 dólares para las familias salvadoreñas. Esta cifra puede parecer irrisoria para algunas personas, no así para las de más escasos recursos.

En todo caso, las gremiales de empresarios del transporte público pusieron nuevamente en jaque a las autoridades gubernamentales y a los usuarios. Pero más a estos últimos: si el incremento se hace efectivo —como de hecho ocurrió al cierre de junio— éste vendría a sumarse a la pronunciada espiral inflacionaria que ha golpeado la capacidad adquisitiva de los salvadoreños en los últimos meses.

Según las versiones de la prensa, el Ministerio de Obras Públicas, la contraparte gubernamental, amarró la autorización del incremento en la tarifa a cuestiones pendientes con los empresarios de transporte como la firma de contratos y el reordenamiento, entre otras. Los usuarios, finalmente, se oponen de entrada al incremento, pues éste vendría a minar aún más su maltrecha economía familiar. De acuerdo a cálculos del Ministerio de Economía, los salvadoreños que dependen de un salario míni-

mo —el cual oscila entre 151 y 158 dólares en el área urbana y 74 dólares en la zona rural— estarían destinando casi un tercio de sus ingresos para cubrir el rubro de transporte.

Pero, más allá del interés económico que media en la disputa, hay serias implicaciones sociales, políticas y culturales que limitan la incidencia de la ciudadanía en las decisiones más importantes que se toman en el sector transporte y que, por el contrario, la sumen en un perenne estado de indefensión ante las disposiciones de los verdaderos señores del sector, es decir, los gremios de empresarios.

Dicha tendencia puede identificarse en otros ámbitos de la actividad social, como el caso de la convivencia en los centros urbanos del país, donde los vendedores informales se han apoderado de los espacios públicos, limitando la libre circulación de personas y vehículos ante la incompetencia de las autoridades municipales. Así, el caso del transporte público es similar: la lógica apunta a que el Estado deberá garantizar, por un lado, el buen funcionamiento del sistema de transporte y, por otro, que el servicio prestado se corresponda con las tarifas autorizadas. Pero la realidad es otra. Los transportistas son quienes, a fin de cuentas, deciden la calidad del servicio —que es pésima— y las tarifas respectivas, sin que entidad alguna, estatal o de cualquier índole, ponga límites a sus abusos.

Desde hace algunos años se ha venido gestando el tipo ideal de empresario culto y de gustos refinados. El empresario tradicional, ávido de ganancias, transgresor de las leyes y en general tosco, ha dado paso a un tipo de empresariado supuestamente comprometido con la sociedad, culto y educado, observante de la legalidad y refinado en sus gustos. Las familias más pudientes y visionarias de la sociedad salvadoreña son los actuales depositarios de esta nueva manera de manejar las empresas. Pues bien, los ahora llamados empresarios del transporte han quedado atrapados en el viejo paradigma empresarial, una de cuyas características es precisamente la prepotencia. El “busero” representa, de hecho, el tipo prepotente, pícaro, la amenaza detrás del volante, que se disputa la vía pública y conduce su unidad a sus anchas, apartando a cualquier persona o vehículo que ose cruzarse en su camino.

Del busero se espera todo menos educación y observancia de las leyes. Basta que tenga sus papeles en regla y que sepa disputarse la clientela con

sus competidores. El buen busero es el que llega a su destino con las mayores ganancias y el menor tiempo posibles, sin importar la seguridad de los usuarios o de los que circunstancialmente aparezcan por su camino. En este sentido, el interés fundamental de los empresarios de transporte —los dueños de las unidades que manejan los buseros— es incrementar sus ganancias, aumentar la flotilla de autobuses u obtener más beneficios y excensiones del Estado; de ninguna manera su interés primario mira a ofrecer los mínimos niveles de comodidad y seguridad a sus usuarios.

Por esta razón, las demandas actuales de los empresarios no incluyen compromiso alguno de retirar las unidades viejas que contaminan el ambiente y exponen a los usuarios a accidentes debidos a fallas mecánicas. Tampoco hablan de renovar sus flotas o introducir programas tendientes a formar en sus empleados actitudes básicas de trato humano y buenas costumbres para con los usuarios. En suma, hablar de los empresarios de transporte y sus empleados, los buseros, es traer a cuenta el oportunismo, la prepotencia, el desorden, el mal servicio y los malos tratos a los usuarios. Pero el problema es más complejo.

Ante un panorama tan desalentador como el descrito arriba se esperaría una contraparte estatal firme, pero dialogante; analítica, pero propositiva de soluciones viables. Mas no es así. El Ejecutivo salvadoreño —mediante sus carteras de Obras Públicas y Transporte— ha jugado un tímido papel en la defensa de los intereses de los usuarios. Por el contrario, tradicionalmente han contribuido al desorden, el tráfico de influencias, las prebendas y el mantenimiento de cuotas políticas. El Ejecutivo no ha hecho nada para aminorar el impacto del incremento de los combustibles. Tampoco puede negociar representando los intereses ciudadanos con los empresarios del transporte porque estos últimos están ligados a intereses políticos. Las dos gremiales de transporte más grandes, ATP y AEAS, tienen vínculos políticos con los partidos FMLN y PCN en la Asamblea Legislativa, respectivamente. Tales intereses han llevado a ambas fracciones a una inusual alianza legislativa en contra de las mociones del Ejecutivo, defendidas en el parlamento por la fracción oficial. Por lo tanto, también el Legislativo contribuye al desorden en el sistema de transporte público.

El presidente Antonio Saca, mientras se encontraba de gira en Europa, giró instrucciones de ne-

gociar con los transportistas defendiendo los intereses de los usuarios, pero la verdad es que a la larga tendrá que ceder ante la presión de aquéllos. El Ejecutivo, como contribuyente del desorden, no tiene la autoridad para poner límites al abuso de los transportistas, por más que el gobierno de Saca intente deslindarse de sus antecesores. En otras palabras, el actual gobierno tendrá que contribuir con más que las buenas intenciones de su presidente y sus ministros estrella para defender los intereses de la ciudadanía, que es la que al final tiene que conformarse con los aumentos y el mal servicio.

Pero, qué papel juega la ciudadanía. Pues acepta pasivamente el decir de los señores del transporte. Es obvio que nos encontramos frente a un problema de pobreza de cultura política y escasez de incidencia ciudadana. En un escenario ideal y ante la incapacidad del Estado, los usuarios se habrían rebelado frente a los empresarios del transporte y frente al Estado mismo, dejando de usar las unidades de transporte público, al menos por unas cuantas horas. De todas formas, son éstos, los salvadoreños de a pie, quienes exponen a diario sus vidas en autobuses y microbuses maltrechos.

